OBSERVACIONES

de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España

con motivo de la consulta pública previa sobre

la aprobación de un proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

Noviembre de 2017

1. Introducción

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha sometido a consulta pública previa la aprobación de un proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

La modificación del referido Real Decreto pretende la adaptación tanto a las disposiciones nacionales como a las europeas vigentes, así como fomentar el uso de material reciclado procedente de las demoliciones en las nuevas construcciones, para hacer efectiva una economía circular en este sector.

El objetivo de la norma es mejorar la gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin de impulsar la jerarquía de residuos, tratando de prevenir la generación del residuo no peligroso de construcción y demolición, y cuando no sea posible esta opción, la utilización de este material bien mediante el reciclado o la valoración material, quedando la eliminación únicamente para el rechazo de las plantas de tratamiento de este flujo de residuos. Se pretende además identificar correctamente los residuos peligrosos y separarlos para garantizar su correcta gestión.

Al propósito de avanzar en la economía circular, otro de los objetivos de la nueva norma es la incorporación de criterios de economía circular en este flujo de residuos, tratando que los fabricantes de productos de la construcción en su proceso industrial tengan que utilizar un porcentaje de material reciclado.

2. Observaciones

Como refiere el propio texto de la consulta, al tratarse de la modificación de normativa básica, solo cabe aprobar una norma, sin que sea posible la adopción de medidas no regulatorias.

Sobre esta base, desde la Cámara de Comercio de España se quieren trasladar algunas observaciones a la futura aprobación del proyecto de Real Decreto, con el fin de aportar elementos para la reflexión y posible perfeccionamiento. En particular:

- Uno de los principales propósitos es adoptar las medidas necesarias que permitan cumplir el objetivo que marca la Directiva Marco de Residuos y la Ley 22/2011, de 28 de julio, que antes de 2020, la cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra forma de valorización de los materiales, con exclusión de los materiales en estado natural definidos en la categoría 17 05 04 “Tierra y piedras que no contienen sustancias peligrosas” de la lista europea de residuos, deberá alcanzar como mínimo el 70 % en peso de los residuos generados.

  El reducido plazo manejado para la aplicación de esta normativa introduce una sustancial carga para las compañías del sector, especialmente pymes, que puede mermar su capacidad competitiva sustancialmente. No en vano, las empresas se verán obligadas a modificar su gestión del proceso productivo, incorporando nuevas prácticas o modificando los procedimientos existentes, lo cual requerirá cuantiosas inversiones tanto en términos materiales como en el ámbito de los recursos humanos. Asimismo, la modificación de las prácticas empresariales en materia de producción y gestión de los residuos previsiblemente requerirá la disposición de personal especializado, instalaciones adaptadas, etc., lo cual entraña la necesidad de cumplimentación de ciertos trámites burocráticos

adicionales, vinculados a la solicitud de licencias, autorizaciones, etc. La gestión de estos procedimientos administrativos, cada uno con sus plazos particulares de tramitación y resolución, también introduce una presión añadida a la empresa en el objetivo establecido para el año 2020.

Por ello, sería preciso garantizar la proporcionalidad en la aplicación de la norma y reducir la carga asociada a su aplicación parte de las empresas, especialmente pymes. En este sentido, sería oportuno que la modificación del Real Decreto se acompañara de determinadas medidas o instrumentos que permitan paliar el efecto adverso sobre las compañías afectadas. En particular:

- La aplicación efectiva de la norma debería incluir ciertos grados de flexibilidad. Esto es, si bien el límite expira en el año 2020, se podría contemplar la posibilidad de certificar / validar el cumplimiento de la normativa sobre la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición a partir de algún mecanismo que permita valorar la intencionalidad o planificación en tal sentido en un horizonte lógico. De ese modo, las empresas afectadas estarían en la obligación de comunicar a la Administración competente hasta el año 2020 su plan de adaptación y ejecución a la nueva norma, con las inversiones y objetivos previstos. Este plan empresarial, presentado a más tardar en dicho año 2020, sería de aplicación durante el calendario previsto en los ejercicios posteriores y, en todo caso, antes del máximo límite estipulado reglamentariamente por la Administración.

  Con ello, las empresas, especialmente pymes, dispondrían de cierto margen para la transición gradual al nuevo escenario, reduciendo así la carga soportada y el potencial efecto adverso sobre su capacidad competitiva.

- Una amplia campaña de información sobre los principales cambios derivados de la nueva normativa sobre la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. En particular, en lo referido a plazos, requisitos técnicos (ej. licencias, autorizaciones, etc.) y opciones existentes, en su caso. Este programa de divulgación debería ajustarse a

las singulares necesidades y características de las compañías afectadas, en especial en lo relativo a sus canales habituales para la recopilación de información y documentación.

- Un servicio de asistencia y ayuda como mecanismo de apoyo directo a las empresas concernidas para la resolución de las dudas surgidas y la remisión de consultas específicas. Este sistema debería garantizar la interacción efectiva entre la empresa y la Administración, no solo a través de medios electrónicos, sino también por vía telefónica y presencial. Esta circunstancia es especialmente significativa en atención a las características, prácticas y recursos de las pymes afectadas.

  Asimismo, este servicio de apoyo debería extenderse durante un periodo lo suficientemente amplio como para asegurar que la amplia mayoría de las compañías afectadas comprenden en toda su extensión las novedades introducidas por la nueva norma.

- Los cambios a introducir deberían asimismo ser lo más neutrales posibles desde la perspectiva de la carga administrativa asociada. La adaptación de las empresas a una nueva práctica de gestión de los residuos, previsiblemente se acompañará de la necesidad de equipos, instalaciones y personal con determinados requerimientos y capacitaciones específicas, para los que se precisarán ciertas licencias, autorizaciones, etc. Con el fin de reducir la carga administrativa soportada adicionalmente, sería conveniente velar por la simplificación de la burocracia asociada a dichas licencias, autorizaciones, etc. Tanto en lo referente a los plazos de tramitación como al coste en términos de número de procedimientos, aportación de documentación, posibilidad de gestión por vía electrónica, coordinación interadministrativa, etc. En suma, la aplicación explícita del principio de simplificación administrativa es especialmente aconsejable en este caso.

3. Valoración global

La modificación relativa a la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición supondrá la necesaria adaptación tanto a las disposiciones nacionales como a las europeas vigentes. Asimismo, contribuirá a fomentar la valorización de material tratado en la propia obra y el uso del material tratado procedente de los residuos de construcción y demolición, elementos claves para el impulso de la economía circular en el sector.

Esta normativa puede servir como modelo para proseguir con este tipo de medidas en el resto de ramas de la economía española, especialmente en aquellas más susceptibles de aprovechamiento de los residuos por parte de la actividad productiva.

Las observaciones planteadas buscan mejorar el proceso de comprensión e implantación del nuevo marco entre todas las empresas afectadas, reduciendo la posible carga añadida asociada a su implantación y velando, en todo caso, por el mantenimiento y mejora de la capacidad competitiva de las compañías del sector.

En este sentido, instituciones intermedias como las Cámaras de Comercio pueden prestar su apoyo activo a través de instrumentos específicos de impulso de la economía circular, gracias a su capilaridad a lo largo del territorio y su cercanía al tejido empresarial, especialmente pymes.

Asimismo, cabe resaltar al respecto la experiencia adquirida por la red cameral en la gestión de las bolsas de residuos y de subproductos. No en vano, el artículo 5.3 de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación establece explícitamente esta función: *"Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación podrán llevar a cabo otras actividades, que tendrán carácter privado y se prestarán en régimen de libre competencia, que contribuyan a la defensa, apoyo o fomento del comercio, la industria, los servicios y la navegación, o que sean de utilidad para el desarrollo de las indicadas finalidades y, en especial, establecer servicios de información y asesoramiento empresarial. Asimismo, podrán difundir e impartir formación en relación con la organización y gestión de la empresa; prestar servicios de certificación y homologación de las empresas y crear, gestionar y administrar bolsas de franquicia, de subproductos, de subcontratación y de residuos, así como lonjas*

de contratación, cumpliendo los requisitos exigidos en la normativa sectorial vigente para el ejercicio de estas actividades".

Por todo ello, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España desea manifestar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente su valoración positiva con motivo de la consulta pública previa sobre la aprobación de un proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.